

Puerto Montt, veintidós de noviembre de dos mil veintidós

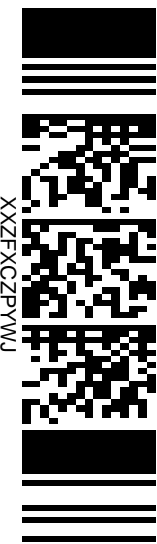
VISTOS:

A folio 1, comparece Juan Cristóbal Grunwald Novoa, abogado en representación de **Jaqueline Inés Pohl Weisser**, agricultora, ambos con domicilio para estos efectos en Fundo La Vega, Comuna de Frutillar, quién interpone acción de protección en contra de la. **Delegada Presidencial Regional de Los Lagos**, doña Giovanna Elvira Moreira Almonacid, por los hechos que expone en su acción.

Sostiene que la recurrente es la actual, única y exclusiva propietaria del denominado “Lote B”, de Línea Pantanosa, comuna de Frutillar, provincia de Llanquihue, con una superficie de noventa nueve coma treinta y tres hectáreas aproximadamente, cuyos deslindes son los siguientes: Norte, Luis Andrade separado por cerco y Alberto Kramer separado por Estero La Huacha; Este, Emilio Hitschfeld separado por cerco en línea quebrada y Antonio Pohl separado por cerco; Sur, Lote A de la misma subdivisión separado por Estero Burro Chico; y Oeste, Lote A de la misma subdivisión separado por línea recta y Luis Andrade separado por cerco en línea quebrada.

Que el título de dominio rola inscrito a fojas ochocientos treinta número mil doscientos veintitrés del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, del año 2005, donde en la actualidad, parte del predio se encuentra arrendado a la empresa Mainstream para la instalación y operación de un aerogenerador de energía eléctrica.

Señala que en horas de la mañana del día 30 de julio de 2022, un grupo de aproximadamente 30 miembros de la denominada Comunidad Indígena Weichan Mapu, liderada por Gilberto Horacio Gáez Velásquez en calidad de presidente, María Elizabeth Gáez Velásquez como su Vicepresidente, Jennifer Alejandra Quintul Martínez como secretaria y Jorge Hernán Caulle Gáez como primer consejero y de otros líderes de la comunidad individualizados como Jorge Hernán Caulle Gáez, Pedro Andrés Catrilef Catrilef y Florinda Amelia Martínez Gáez, hicieron ingreso al predio de la actora, bajo pretexto de una supuesta recuperación ancestral de terrenos y para exigir la paralización de las obras de instalación de



XXZFXCZPYWU

aerogeneradores eléctricos, por parte de la arrendataria del predio. Tras ello, la recurrente concurrió a la Tenencia de Carabineros de Frutillar para efectuar la denuncia respectiva, lo cual terminó en que dichas personas hicieran abandono del inmueble.

Indica que a partir del día indicado, las personas señaladas, junto a otros miembros no individualizados de la comunidad, se han mantenido constante y permanentemente en el deslinde del predio, hostigando y amenazando a la actora y miembros de su familia respecto de la citada propiedad, lo que ha derivado en nuevas denuncias y acciones penales.

El último de los hechos violentos fue con fecha 01 de septiembre de 2022, en donde nuevamente miembros de la comunidad indígena WEICHAN MAPU, motivados por un acuerdo existente con la recurrida, intentaron impedir el normal desarrollo de las labores agrícolas del predio, lo que derivó en un operativo policial, quienes lograron establecer el orden y la restitución del predio.

Que en el intertanto, la recurrida ha sostenido reuniones con líderes de la comunidad indígena Weichan Mapu, dando señales equívocas en el sentido de no resguardar el estado de derecho y la protección de las víctimas, derivando lo anterior en los hechos de violencia señalados.

Cabe señalar que dichas reuniones se han llevado a cabo con fecha 29 de agosto de 2022, a la cual concurrió el Seremi de Desarrollo Social Enzo Jaramillo; con fecha 31 de agosto del mismo año, la cual se desarrolló en dependencias de la I. Municipalidad de Frutillar, con la presencia de la recurrida y la Seremi de energía Lilian Alarcón y tras su finalización, una de las líderes de la comunidad señaló que habrían alcanzado un acuerdo de no ocupación del predio por parte de esta última sin perjuicio de acceder al mismo para la realización de ceremonias, mientras se espera una respuesta definitiva por parte de otras autoridades de Estado.

Se indica que dichas reuniones se llevaron a cabo sin la presencia de la recurrente, alcanzado acuerdos que disponen de la entrada a terrenos de su dominio sin haberse siquiera consultado a su parte, lo cual se constituye como una



amenaza real, cierta y grave de las garantías que la constitución establece en relación con la actora.

Sostiene que la Ley Orgánica N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, crea la figura de la Delegada Presidencial, respecto de la cual corresponde el gobierno interior de cada región en representación del Presidente de la República, teniendo entre sus funciones la de contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública, prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado.

Luego, y a partir de los hechos denunciados, la recurrida ha vulnerado, por vía de omisión, el artículo 19 N°1 de la Constitución respecto a la protección del derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas; el artículo 19 N°3 respecto a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; y el artículo 19 N°24 respecto del derecho a la propiedad.

Solicita que se acoja la presente acción, disponiendo que Carabineros de Chile efectúe vigilancia diaria y permanente del predio de la recurrente; que se informe acerca de la ocupación del inmueble señalado y de quienes las realizan fin de que se puedan adoptar las medidas jurisdiccionales que procedan; ordenando a la recurrida abstenerse de realizar gestiones, reuniones y/o acuerdos en que se ofrezca o disponga de bienes de la actora.

A folio 3, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso. A su vez, se accedió a pedir oficio a la I. Municipalidad de Frutillar para que informe al tenor de lo solicitado por la recurrente en su acción.

A folio 9, consta informe de Mariana Elena Rehbein Ojeda, abogada en representación de Giovanna Elvira Moreira Almonacid, Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, señalando, ante todo, que descarta la participación de la recurrida en la reunión indicada por la actora de fecha 29 de agosto del año 2022 efectuada en dependencias de la I. Municipalidad de Frutillar.

Luego, indica que la recurrida sí ha participado en las reuniones de fechas 31 de agosto y 08 de septiembre, ambas del 2022, estando presente en la primera de ellas miembros de la comunidad Weichan Mapu y no siendo efectivo que se propiciara un acuerdo en los términos denunciados por la actora, toda vez que la



informante carece de las atribuciones para ello. Respecto de la segunda, indica que en ella estuvo presente el cónyuge de la recurrente, don Jaime Neumann, la cual se desarrolló en buenos términos.

Previo a dichas citas, y mediante audiencia solicitada a través de la ley N°20.730, con fecha 30 de agosto del 2022, la recurrida se reunió con la empresa Mainstream, oportunidad en que esta última presentó su cartera de proyectos ante la autoridad y, por cierto, hizo presente la situación del predio en comento.

En este sentido, la recurrida se ha reunido con todas las partes involucradas en los hechos descritos, y no solo con la comunidad indicada, las cuales han sido efectuadas por convocatoria del Alcalde de la comuna de Frutillar y en dependencias de dicho Municipio, en donde la autoridad ha tenido una actitud dialogante y de acompañamiento para la búsqueda de una solución pacífica a la situación que afecta a la recurrente con la comunidad Weichan Mapu, por cierto en un predio de propiedad particular, factor determinante a la hora de dilucidar qué atribuciones puede ejercer la autoridad regional en esta materia.

Señala que la presente acción de protección no es la vía idónea para acoger las pretensiones de la recurrente, toda vez que aquellas deben ser solicitadas ante el Ministerio Público dentro del contexto de alguna causa penal, haciendo presente que en la actualidad existe un proceso vigente en dicho sentido.

A su vez, indica la falta de idoneidad de la presente acción al tratar de obtener la recurrente una declaración jurisdiccional respecto a determinar una eventual omisión de la recurrida en materia de mantención del orden y la seguridad pública, situación que escapa a la naturaleza cautelar urgente propia de una acción de protección, por cuanto no es posible que, a través de esta vía, se le ordene a la Administración la forma en cómo debe ejercer las facultades que le son propias.

Luego, continúa con referencias a las atribuciones contenidas en la Ley N°19.175 orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional respecto del cargo que ejerce la recurrida, precisando que al contar con las atribuciones para velar por el respeto del orden público y resguardo de las



personas y sus bienes, y en el ejercicio de sus funciones, se ha escuchado a todas las partes para dar solución a los hechos denunciados en esta acción.

Señala a continuación que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas y solicita en definitiva que se rechace la presente acción, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en que la Delegada Presidencial Regional de Los Ríos, por un actuar omisivo, no ha procurado adoptar las medidas preventivas o represivas que correspondan para mantener el orden público en relación con los eventos de toma de terrenos de propiedad de la recurrente por parte de terceras personas



pertenecientes a una comunidad indígena de la zona de Frutillar, y reunirse incluso con aquellos, dando señales equívocas respecto de las funciones que le asisten como representante del Presidente de la República en la región.

Cuarto: En este sentido, y tal como la Excma Corte Suprema ha establecido en jurisprudencia reciente, *es un hecho conocido y de pública notoriedad que durante un tiempo considerable han acaecido diversos sucesos vinculados al uso de la fuerza o poder físico, sea bajo la modalidad de amenaza o como acciones concretas, en contra de las personas o grupos de ellas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, cuestión que, en la especie, ha sido denominada como una manifestación de “violencia rural” en esa determinada zona del país* (Rol Corte Suprema N°12.740-2022).”

Quinto: Que si bien la situación descrita por el máximo Tribunal la ubica en una determinada zona geográfica, es innegable que dichos eventos de violencia se han extendido a otras regiones del país, tal como lo es la situación descrita en lo expositivo de este fallo y que dice relación con las tomas de predios por parte de grupos humanos sin que medie alguna autorización judicial.

Sexto: Que en este sentido, el artículo 2 de la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, al establecer las funciones otorgadas al Delegado Presidencial, sostiene, en su letra b), que este debe *“velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bien”,* y en su letra “c) *Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.”*

Séptimo: En relación con el cumplimiento de dichas funciones, y estando asentando que la recurrente ha sido objeto de diversos eventos de violencia que se han traducido en la entrada a la propiedad de aquella por terceras personas sin que hubiere mediado autorización para ello, eventos que han terminado con el desalojo de las mismas por parte del personal policial, la recurrida ha adoptado la decisión de llevar a cabo diversas reuniones entre todos los actores involucrados en estos hechos, tal como lo ha indicado al evacuar su informe en esta causa.



Octavo: Luego, y reconociendo que el actuar de la administración debe ser autónomo respecto de la injerencia de otros poderes del Estado, por cuanto aquello constituye el principio básico de todo Estado de Derecho moderno, y que las reuniones llevadas a cabo por la Delegada Presidencial Regional se han enmarcado en el cumplimiento con las funciones otorgadas por ley y dentro de dicha esfera de autonomía reconocida a nivel constitucional para dicha autoridad pública, se aprecia por estos sentenciadores que las medidas adoptadas por la misma han resultado insuficientes para dar una pronta y efectiva respuesta a los hechos denunciados en esta acción, situación que redundará en una puesta en peligro de las garantías fundamentales invocadas por la recurrente en esta acción.

Noveno: Así las cosas, el deber de diligencia exigido a la administración para este tipo de eventos, en donde el riesgo de afectación de las garantías constitucionales implica una respuesta temprana y efectiva para evitar una posible vulneración de las mismas, necesariamente debe ser mayor atendida las circunstancias de los eventos denunciados por la recurrente. En este sentido, la Corte Suprema ha sostenido que *“de igual modo, es importante destacar que en semejantes coyunturas, ante determinaciones tan definitivas para las personas, cabe exigir mayor diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.”*

Décimo: Finalmente, esta Corte estima que el actuar de la recurrida resulta arbitrario por cuanto si bien ha realizado algunas acciones tendientes a dar una solución al conflicto planteado en esta causa, aquella respuesta no ha resultado suficiente toda vez que no se ha dado cuenta, por parte de la Delegada Presidencial de Los Lagos, de acciones concretas que permitan evitar la reiteración de los eventos denunciados por la recurrente a futuro, lo que se traduce, en consecuencia, en un mayor deber de diligencia y coordinación por su parte con todos los actores y órganos pertinentes que permitan dar una debida protección y resguardo de la recurrente ante eventos de similar connotación, debiendo aunar, en su caso, los diversos criterios que se sostengan por las partes en cumplimiento de los deberes exigidos por la ley a dicha autoridad pública. Por



lo anterior, esta Corte acogerá la presente acción de protección en los términos a indicarse en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, **se declara:**

I. Que **se acoge sin costas**, la acción interpuesta por Juan Cristóbal Grunwald Novoa en representación de **Jaqueline Inés Pohl Weisser**, en contra de **Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, doña Giovanna Elvira Moreira Almonacid**, solo en cuanto la autoridad recurrida deberá, en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de recurrente que ha visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra.

Redacción a cargo del Ministro Titular, don Jorge B. Pizarro Astudillo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°4178-2022.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt integrada por los Ministros (as) Jorge Pizarro A., Juan Patricio Rondini F. y Abogada Integrante Margarita Isabel Campillay C. Puerto Montt, veintidós de noviembre de dos mil veintidós.

En Puerto Montt, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.